

SOBREAVISO
RENÉ DELGADO
 sobreaviso12@gmail.com



Aunque dicen ser distintos, los políticos se parecen cada vez más. Pese a la furia social, insisten en seguir en lo suyo sin mirar ni dar respuesta a la ciudadanía

Politicidio y furia social

Al modo de Juan Pirulero, cada actor político atiende su juego: buscar clientelas, entusiasmar a la base, descuidar ciudadanos, cultivar la parcela, fijar o cuestionar la agenda, atraer reflectores, cavar trincheras, ganar algún cachito de gloria, encontrar y envolverse en alguna bandera, burlar o descalificar al adversario, tirarse de los cabellos, comerse las uñas, tronarse los dedos y, así, no muy conscientes, dar al traste... con la política, al tiempo de abrirle la puerta a la desestabilización y animar la furia social.

Increíble. Con la mano en la cintura y enorme irresponsabilidad, el Ejecutivo denuncia supuestos intentos golpistas en su contra. El presidente del INE reclama alcanzar acuerdos a partir del consenso, mientras él da madruguetes. El coordinador de los senadores panistas no descarta reponer la pena de muerte, animado por la idea de un correligionario. Los gobernadores fingen demencia, se pegan a la pared o se agachan. Los legisladores hacen, deshacen y rehacen leyes, creyendo así modificar la realidad. Los jerarcas eclesiales mejor ya ni abren la boca, a excepción del vicario de Morena. El dirigente priista se hace guaje ante la idea de pedir perdón a la ciudadanía. La dirigencia de Morena entra en disputa y, entonces, algunos legisladores aprovechan para salirse del redil o tirar pa'l monte. Los ultras del neoliberalismo exigen a los empresarios lanzarse ya contra el presidente de la República y dejar de tomar atole. Algunos ministros y magistrados retrasan resoluciones para no meterse en líos, aunque los

problemas se alarguen y alarguen.

Y, claro, cuando la realidad pone contra la pared a la clase política y sus huestes, la niegan, viendo detrás de ella una mano negra, azul o morena, o bien, asegurando que alguien la mece o le da cuerda. Eso sí, todos juran actuar en nombre de la justicia, la democracia y la igualdad, en bien de la patria, recargando en el contrario la culpa.

Sólo la violencia y el crimen están de fiesta... mientras la esperanza democrática se diluye.

• • •

Más de un foco rojo del malestar social titila aceleradamente, pero la clase política y sus acólitos están tan metidos en lo suyo que ni cuenta se dan, y nada les dice lo sucedido en el vecindario latinoamericano.

Si, de súbito y de modo brutal, la estabilidad entró en crisis en Chile, Ecuador o Colombia por problemas aparentemente controlados, aquí, viendo cómo crece la furia social por la violencia contra las mujeres, la inseguridad pública, la falta de medicamentos o servicios, las pensiones de retiro, la operación disfuncional de la Universidad, el gobierno del crimen en más de una región o el deterioro de los servicios públicos, la clase política interpreta de modo singular esa realidad.

La mira a partir de una óptica bipolar: son pretextos para sabotear mis planes y mi mandato o, si bien es grave cuanto sucede, lo verdaderamente importante es la oportunidad de sacarle raja política.

Bajo esa interpretación, las ocurrencias de un lado o del otro brotan casi de manera espontánea. Radicalizar castigos y penas, aun cuando la impunidad sea la reina dominante; encargar al Ministerio Público los escolares cuyos padres no pasen a recogerlos, aun cuando esa institución no ate ni desate; elaborar decálogos de bote pronto; discutir si debe aplicarse mano dura o blanda, o de plano sacar las manos; disponer patrullas en las escuelas; crear fiscalías especiales; guardar un minuto de silencio cada que sea necesario; banalizar la gravedad del asunto con un fúchila, guácala y, desde luego, elevar una y otra vez la infaltable enérgica condena, aparte de exigir que caiga todo el peso de la ley sobre los autores del crimen en turno, a sabiendas de la levedad de aquella.

Así, sin pensar, acordar, elaborar ni sostener políticas serias de corto, mediano y largo plazo, lo más lejos que se llega es a ir poblando el país de memoriales y anti-monumentos para venerar el recuerdo sin remontarlo, mientras la clase política deja escapar por tercera ocasión la posibilidad de hacer de la alternancia una alternativa.

• • •

Saben la clase política y su porra de la fragilidad de la economía y las finanzas, donde un paso en falso puede quebrarlas, así como de la crisis en la cual se encuentra el régimen de partidos. Sin embargo, juegan no a dar respuesta a la ciudadanía, sino a ofrecerle explicaciones históricas de cuanto le sucede o, desde la

oposición, a exponerle un catálogo viejo de recriminaciones al gobierno.

El impresionante informe del INE sobre la brutal caída del padrón de militantes de los partidos políticos –a excepción de ese baluarte que es el Partido Verde– habla del engaño con que proceden a afiliar cuadros y, si no del engaño, de la creciente decepción política generada por ellos. Esa crisis habla de partidos sin discurso, pobres en su militancia, multimillonarios en sus recursos y, por lo mismo, dispuestos a pelear su dirigencia aun cuando pierdan la dirección y el rumbo. Ese informe habla de la fascinación por practicar la política ficción.

Si esos partidos son los pilares de la democracia, ésta puede derrumbarse.

En tal situación, frágil la economía y las finanzas y en crisis el ejercicio de la política, no advertir que la furia social puede desatar un problema de mucha mayor proporción es tanto como jugar, si cabe y vale el término, a un autopoliticidio. Al absurdo de ver cómo los supuestos políticos profesionales liquidan a la política y le abren la puerta a una situación aún más compleja que la de hoy.

La furia social y la violencia criminal ponen de nuevo al Estado contra la pared e, increíblemente, la clase política se empeña en seguir jugando a Juan Pirulero.

Además de admitir que las deportaciones con Obama fueron un error, los demócratas deben comprometerse a no repetirlo.

JORGE RAMOS ÁVALOS
@jorgeramosnews



El 'gran error'

LAS VEGAS.- Los demócratas no van a ganar el voto latino prometiendo más deportaciones y, aunque les duela, tienen que alejarse del legado del ex presidente Barack Obama. El desafío de los candidatos presidenciales es ganarle a Donald Trump. Y para eso necesitan los votos y la confianza de los latinos.

Ahora que los candidatos del Partido Demócrata les están haciendo todo tipo de promesas a los latinos, es preciso asegurarse de que se comprometan a no deportar a millones de inmigrantes, como lo hicieron los últimos ex presidentes.

El mandatario Barack Obama fue llamado el "Deportador en Jefe" por Janet Murguía, presidenta de UnidosUS (antes el Consejo Nacional de la Raza). Ese calificativo siempre molestó al Presidente y hoy, todavía, sigue incomodando a sus colaboradores. Pero le llamaban así debido a que Obama, en sus dos periodos de gobierno, deportó a más de tres millones de indocumentados, según cifras del Departamento de Seguridad

Interna que se remontan a 1892.

En una reciente entrevista en Las Vegas, le pregunté al precandidato presidencial Joe Biden –y quien fuera vicepresidente en el gobierno de Obama– si estaba dispuesto a disculparse por tantas deportaciones y decir que esa política estuvo equivocada. "Creo que fue un gran error", reconoció públicamente por primera vez. "Tomó mucho tiempo en hacer lo correcto".

Pero luego Biden me sorprendió al decir que "hubo más personas deportadas durante los gobiernos de George W. Bush y de Bill Clinton". Le dije, por supuesto, que revisaría los datos y al finalizar la entrevista sus colaboradores me hicieron llegar el documento en que se basó el ex vicepresidente para decir eso.

El tema es importante porque Barack Obama preferiría ser recordado entre los latinos por DACA –que ha ayudado a más de 800 mil *dreamers* o estudiantes indocumentados– que por haber sido el "Deportador en Jefe". Y Biden, quien defiende el legado de Obama, tampoco

quiere que lo responsabilicen por una política que, en la práctica, separó a muchas familias. Eso no da votos entre los hispanos.

El asunto de los números es complejo. Obama deportó formalmente a más inmigrantes que cualquier otro Presidente. Esto se basa en la categoría de *removals*, como se le dice en inglés, o inmigrantes que fueron sacados del país por la decisión de una corte o por un proceso legal. Pero si a esas cifras le sumamos la categoría de los *returns* o personas que fueron detenidas poco después de cruzar la frontera y regresadas en días o semanas a México sin un proceso judicial, entonces la cosa cambia. Con esas matemáticas –sumando *removals* y *returns*– Bill Clinton y George W. Bush sacaron a más personas del país –12 y 10 millones respectivamente– que los 5 millones que en total salieron durante el gobierno de Obama.

Pero quién ha sido el mayor deportador no es el asunto central. El problema sigue siendo que Obama expulsó

a millones de inmigrantes que ya se habían establecido en Estados Unidos y que, en su mayoría, no tenían un récord criminal. Hasta el mismo Biden lo acepta. “Fueron demasiados”, me dijo. “Aunque haya sido más que nunca o no, fue un error”.

Todo este debate, por supuesto, es inútil si Donald Trump gana la reelección. El actual Presidente ha deportado a menos personas que Barack Obama. Pero tiene una clara política antiinmigrante –les ha llamado criminales y “violadores” a inmigrantes mexicanos– y su estrategia se ha centrado en evitar que entren nuevos inmigrantes.

Cualquiera que gane la Casa Blanca este año debe rechazar una política migratoria basada en las deportaciones, en las prohibiciones de entrada a ciudadanos de ciertos países y en el miedo. La mayoría de los latinos favorece la legalización de millones de indocumentados. Y los grupos más progresistas, como United We Dream (la mayor organización de *dreamers* en el país), están presionando a los precandidatos presidenciales demócratas para que se comprometan a suspender las deportaciones de personas sin historial delictivo. Lo que hicieron Clinton, Bush y Obama no debe volver a ocurrir.

Es un buen primer paso que el vicepresidente Biden haya reconocido que esas deportaciones fueron un “gran error”. Lo importante ahora es no repetirlo.

PARALAJE

LIÉBANO SÁENZ

@liebano



Entre el descontento y la prudencia

Cada país tiene sus escándalos por la venalidad en las altas esferas de la política; también aflora el malestar de una sociedad insatisfecha con sus gobernantes, incluso aquellos que, siendo honestos, se muestran insensibles y defensivos frente a los problemas más urgentes que afectan a las familias

Nuestra generación es testigo del fin de una época. No es solamente lo visible, sino también lo que está en el fondo de lo social. Es un proceso histórico de mayor profundidad respecto a lo aparente. El descontento es una de sus expresiones y ocurre por dos razones: una mayor capacidad y libertad para informarse, actuar y participar; y problemas de siempre, que se agravan y lastiman real y simbólicamente a personas y grupos sociales. No es un tema local, de diversas formas está ocurriendo en muchas naciones del mundo occidental.

El descontento como fenómeno social autónomo, puede ser motor para una transformación virtuosa, pero también conlleva el riesgo de arrasar con lo bueno que existe, sin lograr el cambio que se anhela. Todas las señales muestran que lo que existía ha perdido capacidad de respuesta o que por sí mismo generó procesos de autodestrucción explícitos en la creciente corrupción del pasado reciente. Cada país tiene sus escándalos por la venalidad en las altas esferas de la política. También aflora el descontento de una sociedad insatisfecha con sus gobernantes, incluso aquellos que, siendo honestos, se muestran insensibles y defensivos frente a los problemas más urgentes que afectan a las familias.

Los tiempos convulsos demandan prudencia. Sobre todo, por las autoridades, que no deben ser dominadas por el impulso impaciente que de manera natural se presenta por la inconformidad social. Al gobierno, le toca enten-

Fue un error que por el ahorro financiero se desatendieran instituciones de apoyo a las mujeres

der el descontento. La insensibilidad de un lado o de otro genera riesgos mayores. Allí está el ejemplo de Chile, un país con logros extraordinarios en muchos sentidos, pero que, con inesperada facilidad, desbordó en violencia.

México tiene instituciones sólidas para garantizar la paz social y que han servido para la conducción civilizada en la disputa por el poder. Han pasado la prueba en cuanto a su objetivo, pero sus actuales beneficiarios no solo no las reconocen, sino las repudian, las ven como parte del orden corrupto y, a veces, como amenaza. Esto ocurre en medio de la insatisfacción de buena parte de la sociedad con las instituciones y con los valores propios de la democracia. No solo no hay aprecio ni confianza hacia éstas, ni siquiera el principio de legalidad ha cobrado fuerza. Sin embargo, la mayor amenaza no viene de los enemigos de la democracia, sino de la indiferencia colectiva para defender lo que es patrimonio de los mexicanos.

El descontento, insisto, puede ser un gran activo para transformar y perfeccionar mucho de lo que existe; la

inconformidad debe servir para construir lo que hace falta. Por ejemplo, la brutal ola de violencia criminal contra las mujeres —y no solo contra las mujeres— nos revela que debieron fortalecerse todas las instituciones que servían de red social para la denuncia, atención y protección de las féminas en situación de amenaza por razones de violencia, social o familiar. Fue un error que en aras del ahorro financiero se desatendieran estos temas. Lo que se debe hacer es enmendar, y con un sentido de prudente responsabilidad, apoyar y ampliar este tipo de iniciativas y entidades, como muchas otras que bien pueden incidir para empezar a contener la violencia y de manera particular, los feminicidios.

La prudencia que debe imperar en las autoridades conlleva el saber escuchar. No es fácil soportar la crítica en curso por la impaciencia de muchos. En buena parte podría ser hasta un tanto cuanto injusta, porque ciertamente quienes han llegado al poder han heredado una descomposición de mucho tiempo atrás, además de que hay problemas en los cuales es copartícipe la misma sociedad. Precisamente por esta consideración, es necesario que las autoridades mantengan la vertical, un sentido humanitario de comprensión y lo que es más relevante, respuestas concretas que atiendan al reclamo no solo en sus causas, sino en sus efectos y en las responsabilidades institucionales que también es necesario reconocer para remediar y mejorar.

Lo que ahora queda claro, es que es un error creer que el descontento se resuelve invocando razones morales, ideológicas o de origen democrático de la autoridad. Si bien es cierto que mucho contribuye al acuerdo el relevo democrático de autoridades, también lo es que la exigencia de resultados persiste. Muchos están predispuestos a conceder tiempo, pero otros, en especial quienes viven al borde de la existencia, sean familiares de víctimas de la inseguridad, de enfermos de cáncer o desempleados, tienen un sentimiento de urgencia para que el gobernante atienda real y efectivamente la situación.

El régimen actual cuenta con la enorme ventaja de la legitimidad y el aval social que ofrece el voto, así como con la expectativa propia de la renovación. Sin embargo, no se debe desdeñar, incluso si fueran expresiones minoritarias, el reclamo al conjunto del sistema por un cambio a fondo y para bien. La prudencia en estos tiempos es necesaria y requiere ir acompañada de respuestas. —